

Capítulo 1. Efectos económicos y sociales del conflicto

El conflicto siempre ha existido a lo largo de la historia, no obstante, su naturaleza ha ido cambiando. Los conflictos actuales ya no se llevan a cabo en campos de batalla, ahora surgen en entornos tanto rurales como urbanos. El conflicto nace del desacuerdo en los intereses de dos o más grupos de actores que luchan por alcanzar estatus, poder o recursos. Este resulta de la incompatibilidad de intereses, creencias opuestas, lucha de valores y reclamos de estatus, poder o recursos en una etapa que se intensifica y se vuelve destructiva (Davies, 2004). Según Mashala et al. (2018) existen tres (3) categorías de factores que desempeñaron un papel clave en el desencadenamiento de los conflictos: políticas económicas deficientes, mala gobernanza e incapacidad institucional e intereses geopolíticos a nivel tanto regional como global que han generado un deterioro en el tejido socioeconómico en todos los niveles.

En consecuencia, la existencia de las guerras, los conflictos y la violencia, tienen efectos devastadores para una sociedad, no solo han dejado destrucción y muerte, sino que han limitado el desempeño económico y la cohesión social de los países afectados. Según Gates et al. (2010), además de las víctimas de guerra, el conflicto reduce el crecimiento del PIB, aumenta la mortalidad infantil, disminuye el adecuado acceso al agua, incrementa la violación de derechos humanos y aumenta la fragilidad social incrementando la exclusión social, económica y política.

La violencia manifestada en diversas ocasiones por medio del conflicto ha tenido importantes consecuencias sobre el desarrollo económico y social de un país; en general impide que se lleven a cabo dinámicas que permitan potenciar la economía y a su vez causa rupturas sociales. De acuerdo con el PNUD (2003) los investigadores identifican siete clases de costos asociados al conflicto armado: el gasto militar directo; la infraestructura y activos materiales destruidos; el valor económico de las vidas perdidas; el costo de los daños sociales (salud, desplazamientos de población); las transferencias ilícitas (a título, por ejemplo, de secuestros); el desperdicio debido al miedo o la incertidumbre (tierras abandonadas, fuga de capitales) y la destrucción de intangibles (en particular, de confianza y “capital social”).

Todos estos costos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los económicos y los sociales. De conformidad con Valencia (2006) entre los costos económicos se deben considerar la fuga de capitales (inversión a

actividades productivas) y los daños a propiedades y bienes de la población (casas, vehículos, enseres). Por su parte, entre los costos sociales se encuentran pérdidas en bienes materiales por saqueos, destrucción de viviendas, escuelas y centros de salud, así como afectación a las personas por muerte y desplazamiento. Además de los secuestros y la pérdida del capital social (cambio en los comportamientos y percepciones, corrupción, aislamiento y pesimismo).

En resumen, el conflicto ha provocado importantes repercusiones sobre las actividades económicas y el bienestar de la población. En esta sección se describen algunos costos económicos y sociales que ha traído el conflicto a lo largo del tiempo.

1.1. Costos económicos del conflicto

El conflicto provoca un retroceso económico con graves consecuencias sociales, políticas y sanitarias. Esto ha llevado al desarrollado grandes esfuerzos para demostrar las consecuencias y costos del conflicto asociados con la actividad económica y crecimiento de un país. Sumado a esto se han evidenciado efectos sobre la productividad, el empleo, la asignación de recursos, la efectividad de las administraciones locales, así como afectaciones sobre la inversión, las relaciones comerciales, los precios, la distribución del ingreso y la pobreza.

Inicialmente, los estudios se enfocaron en cuantificar los costos económicos a través de las afectaciones sobre el crecimiento de una región o país. La evidencia empírica muestra que efectos sobre la composición de la actividad económica y el crecimiento del PIB se deben principalmente a la destrucción del capital humano y físico, el debilitamiento de las relaciones comerciales y el desincentivo de la inversión dada la incertidumbre e inestabilidad política, los cuales llevan a la disminución de la producción y una pérdida gradual del stock de capital (Collier, 1999). Al analizar estos efectos sobre el nivel de crecimiento de corto y largo plazo, se revela que las guerras y el conflicto armado tienen mayores impactos en el corto plazo dado que en el largo plazo y en estado estacionario este efecto desaparece, puesto que se diluye por convergencia (Murdoch y Sandler, 2002), además, con el tiempo una economía se puede reparar sola (Murdoch y Sandler, 2004).

En general, las economías que atravesaron por periodos de guerra sufrieron una desaceleración del crecimiento económico. Un ejemplo de ello es el caso colombiano, para el cual se encuentran grandes costos y consecuencias del conflicto armado dada su fuerza y larga duración. Entre

1990 y 1998 los costos representaron una pérdida del producto interno bruto –PIB– colombiano entre el 1,5% y 4% (Trujillo y Badel, 1997; Álvarez y Rettberg, 2008), y entre 2005 y 2006 los costos representaron pérdidas cerca del 9% del PIB (Álvarez y Rettberg, 2008). Estos efectos no solo se han reflejado a nivel nacional, algunas investigaciones se han interesado por comprender los efectos del conflicto a nivel municipal y departamental. En el primer caso, Durán (2011) estudió el efecto de la violencia asociada al conflicto armado en el crecimiento municipal en Colombia para el periodo 1998-2008. Encontró un impacto negativo y significativo del conflicto sobre el crecimiento generado por ataques de grupos paramilitares. En el segundo caso, se encuentran los trabajos de Querubín (2003) para 24 departamentos, Triana (2014) para 32 departamentos y Ramos et al. (2017) para ocho departamentos. Los resultados de estas investigaciones permiten concluir que el conflicto armado provoca una desaceleración del crecimiento económico.

Cuando se desagrega la producción por sectores, se encuentra que uno de los sectores más afectados por la violencia, y que ha sido discutido ampliamente por la literatura, es el sector turismo, dado que el terrorismo reduce significativamente la llegada de turistas. De acuerdo con Enders et al. (1992), los países europeos que dependen del turismo como fuente de divisas, pierden grandes ingresos turísticos debido al terrorismo. En esta línea, Drakos y Kutan (2003), en un estudio para tres países mediterráneos, encontraron que la intensidad de los actos terroristas y la ubicación geográfica de los incidentes tienen importantes efectos en las cuotas de mercado de los países involucrados. Así mismo, Llorca (2008) para países del G7, evidencia que el terrorismo doméstico e internacional tienen una influencia negativa moderada sobre el flujo de turismo, dado que el número de víctimas domésticas y los ataques internacionales son factores relevantes en el momento de los turistas extranjeros realizar su elección.

Otros sectores afectados por el conflicto son la industria, la producción de café y el sistema financiero. Gunduz y Sezgin (2004), en un análisis para el sudeste de Turquía para el periodo de 1984-2000, encontraron que la industria es el sector más afectado negativamente por el conflicto armado. De igual forma, Kutan y Yaya (2016) sugieren que el terrorismo persistente disminuyó el crecimiento de la producción industrial y aumentó la volatilidad en la industria y el café en Colombia. Adicional a esto hallaron que el terrorismo tiene un efecto significativo en el cambio del mercado de valores y un impacto de corta duración en la volatilidad en la Bolsa de Valores, donde los inversores responden de forma marginal.

En línea con el último efecto mencionado, Rigobon y Sack (2005)

a partir de estimaciones por el método de variables instrumentales (IV) y el método de momentos generalizado (GMM), encontraron que los aumentos en el riesgo de guerra causaron caídas considerables en los rendimientos del tesoro, en los precios de las acciones reportaron una ampliación de los diferenciales de rendimiento corporativo, una caída del dólar y un aumento en los precios de los futuros del petróleo. Así mismo, Barros et al. (2009) analizan el caso del País Vasco para establecer los efectos que tuvo la actividad terrorista del grupo ETA con respecto a las medidas de política y el índice bursátil del país entre 2001 y 2005, los autores encontraron que un aumento del nivel de violencia diaria en las calles provoca una caída del índice bursátil en el periodo posterior.

Es importante mencionar que no solo se ven afectados indicadores económicos a nivel interno, las afectaciones del conflicto armado tienen a su vez consecuencias sobre la inversión extranjera y las relaciones comerciales. De acuerdo con Enders y Sandler (1996), las campañas terroristas tienen impactos significativos, acumulativos y permanentes en las tenencias netas de capital extranjero, mostrando reducciones de la Inversión Extranjera Directa [IED] de un 13.5% anual para el caso español y del 11.9% para el caso de Grecia traducidas en pérdidas del equivalente al 7,6% y el 34,8% de la formación bruta de capital fijo anual. En esta línea, Abadie y Gardeazabal (2008) analizan el efecto del terrorismo en una economía mundial integrada utilizando un modelo estándar de crecimiento endógeno. Las estimaciones sugieren que el incremento de una desviación estándar en la intensidad del terrorismo produce una disminución en 5% en la inversión extranjera directa. De acuerdo con Sandoval y Martínez (2010), la disminución del conflicto armado ofrecería escenarios para los cuales existan incentivos para la inversión extranjera, impulsando de esta forma el crecimiento económico, favoreciendo la productividad y la calidad de vida.

Con relación al comercio internacional, Nitsch y Schumacher (2004) encontraron que el primer acto terrorista en un par de países reduce el comercio bilateral en casi un 10%; si un país sufre de ataques terroristas comercializa solo alrededor del 91% de lo que los dos países comercializarían, si estuvieran completamente libres de actos de terrorismo. Además, todo tipo de violencia doméstica reduce considerablemente el comercio, independientemente de si toma la forma de asesinatos, actividades guerrilleras, purgas, disturbios o revoluciones.

Por otro lado, algunos trabajos se han enfocado en analizar la relación que puede existir entre estas acciones bélicas con respecto a los precios de distintos bienes. En esta línea aparecen los trabajos de Dube y Vargas (2013)

y Ajzeman et al. (2014) quienes analizan el caso colombiano y mexicano. En el primer caso, los autores a partir del análisis por el método de diferencias en diferencias de un panel equilibrado con 978 unidades municipales concluyeron que la caída de los precios del café indujo a un aumento de 0.09, 0.02 y 0.10 puntos porcentuales en ataques de guerrilla, paramilitares y enfrentamientos respectivamente. Por otro lado, el incremento en los precios del petróleo se tradujo en 0.08 más ataques a municipios petroleros respecto de aquellos no petroleros. En el segundo caso, los autores a través de la estimación de un panel de datos concluyeron que la violencia generó un efecto distributivo regresivo donde un aumento en los homicidios en una desviación estándar, en promedio disminuye en un 3% los precios de las viviendas de la población de bajos ingresos.

Con relación a la productividad y el empleo, se evidencia que el conflicto los afecta principalmente a causa del desplazamiento de la población, en algunos casos la simple presencia no tendría repercusiones sobre estas variables. Por ejemplo, García y Quiroga (2017) realizan un análisis sobre la productividad de los departamentos colombianos a través del uso del suelo de esos territorios, el cual les permite concluir que la presencia de grupos armados en los territorios no explica la falta de competitividad y productividad del país, ya que, sin importar qué tan expuesto se ha encontrado el departamento al conflicto armado, el porcentaje de tierra utilizada a la vocación productiva es demasiado baja. En contraposición, Romero (2019) evidencia que existen dos mecanismos mediante los cuales el conflicto afecta la productividad ganadera. El primero asociado al desplazamiento que obliga a abandonar las actividades productivas y el segundo relacionado con los costos adicionales en que se incurren para permanecer en la zona.

Como consecuencia del desplazamiento no solo se ve afectada la productividad, sino también el empleo. De acuerdo con Restrepo y Aponte (2009), la población desplazada debe adaptarse a un nuevo estilo de vida y buscar un nuevo trabajo. Esto a su vez da lugar a nuevas problemáticas dado que cuando la población empieza a migrar a otras ciudades, aumenta el desempleo y la informalidad. Por otra parte, aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral por su nuevo rol como jefe de hogar. En esta línea, de acuerdo con Merlano (2015) la participación laboral de las mujeres expuestas al conflicto es mayor que la de los hombres, lo que obedece a la vinculación de los hombres a grupos armados y el cambio de rol de las mujeres como jefe de hogar.

Desde la perspectiva de asignación de recursos, la literatura sugiere que cuando se atraviesa un periodo de guerra el Gobierno tiende a destinar una

gran proporción de recursos para la guerra e impide que las administraciones locales cumplan de manera efectiva con la provisión de algunos servicios. Se ha evidenciado que se destina un gran porcentaje de recursos en gastos de guerra, que podrían ser dirigidos a la mejora de los servicios como educación, salud y vivienda (Castellanos, 2016). Eckstein y Tsiddon (2004) demuestran que cuando aumenta el terror, la respuesta del Gobierno no es compensar por completo la situación. En las economías que enfrentan el terror, aunque el gasto del Gobierno en seguridad es mayor, la vida es en promedio menos segura y más corta, el crecimiento es más lento y la producción y el consumo en estado estacionario son más bajos.

En este sentido, Rodríguez (2009) afirma que el conflicto armado ha afectado el cumplimiento de funciones asociadas a la provisión de servicios de salud, educación y saneamiento, reduciendo la calidad de educación, disminuyendo los indicadores de saneamiento y efectos negativos en la provisión de servicios de salud a excepción del régimen subsidiado que por la estructura del sistema de aseguramiento y las características de la población ente tiene un efecto positivo.

Con relación a la distribución del ingreso y la pobreza, diferentes autores analizan cómo esta dinámica profundiza la desigualdad de ingresos y se concentra en ciertos grupos respectivamente. García (2015) a partir de un estudio para el caso colombiano llegó a la conclusión de que existe una relación positiva entre las variables del conflicto y el coeficiente de Gini a nivel departamental durante el período 1988-2012 y que estos efectos son más fuertes cuando participa el Estado en los diferentes enfrentamientos. Por otro lado, Di Tella et al. (2006) analizaron para el caso argentino cómo se distribuyen los aumentos de la delincuencia entre los diferentes grupos de ingresos para el período 1990-2001 concluyendo que las personas de más bajos ingresos son las principales víctimas, cuya tasa de exposición a homicidios fue 1.5 veces mayor a la observada en las personas de mayores ingresos.

Las consecuencias del conflicto permiten identificar aspectos objetivos y subjetivos de la pobreza, donde los primeros están asociados a la ausencia de satisfacción de necesidades fundamentales y los segundos a la percepción de los afectados. No obstante, resaltan más los aspectos asociados a la pobreza subjetiva dada la ausencia de seres queridos, salud y libertad por las nuevas condiciones de vida impuestas por el conflicto, especialmente por el desplazamiento, limitándose el disfrute de la vida y las posibilidades para trabajar (Daza, 2020). De acuerdo con Restrepo y Aponte (2009) se han discutido los canales a través de los cuales el conflicto empeora la pobreza,

sin embargo, la pobreza también es un factor determinante del conflicto, existiendo de esta forma una doble causalidad entre las variables. La evidencia empírica ha encontrado que la fragmentación y desigualdad están asociadas con el conflicto, donde los enclaves sociales y económicos están relacionados con el surgimiento, duración e intensidad del conflicto (Restrepo y Aponte, 2009).

Finalmente, al caracterizar las consecuencias económicas del conflicto para el caso colombiano se encuentra que estas se pueden resumir y agrupar en dos, directas o indirectas. Las primeras están asociadas con infraestructura física, costos de secuestros y extorsiones, gastos en defensa (Álvarez y Rettberg, 2008). Entre los costos directos, Trujillo y Badel (1997), encuentran que, del total de costos brutos de la criminalidad, la pérdida de vidas representa 31%, el exceso de gasto militar el 22%, el gasto en seguridad el 17%, los delitos patrimoniales el 15%, el secuestro, el robo y la extorsión el 12% y el terrorismo el 2%. Así mismo, Álvarez y Rettberg (2008) evidencian que el conflicto dejó importantes pérdidas en infraestructura petrolera, eléctrica y de comunicaciones, además de afectar infraestructura vial (peajes y puentes). Adicional a esto, se encuentran grandes pagos de rescate y gastos estatales destinados a la prevención y control de secuestros, junto con altos costos por extorsiones principalmente a ganaderos y los gastos en defensa y seguridad nacional. Por su parte, en los costos indirectos, se relacionan las pérdidas en la productividad, deficiente distribución de ingresos, reasignación de recursos y debilitamiento de relaciones comerciales e inversión (Álvarez y Rettberg, 2008).

1.2. Costos sociales del conflicto

De acuerdo con Wood (2010), algunos procesos sociales desencadenan efectos que pueden ser permanentes. En primer lugar, la movilización política es un proceso social que busca la atención del Estado ante ciertas inconformidades. Cuando estas no son atendidas o cuando el Estado decide ejercer violencia, se forman movilizaciones secretas por grupos de insurgentes, además de formarse movilizaciones de élites locales que buscan sacar provecho de la situación, dando origen al conflicto armado. La población común se ve gravemente afectada ante esta circunstancia dada la violencia política, sexual y psicológica a la cual se ve sometida, causando que las víctimas se retiren de la interacción social y vivan aisladas (Wood, 2010).

En segundo lugar, se da un proceso de socialización militar, donde a través de redes de apoyo se crean memorias del conflicto. Luego de esto,

viene la polarización de identidades locales, donde los actores sociales toman partido con el fin de obtener un beneficio o buscar protección. El efecto de la polarización es la segregación de comunidades que se ven obligadas a huir por amenaza de los grupos armados en forma de limpieza social, donde obligan a la comunidad que no es aliada a salir de la zona. A su vez, como consecuencia de la polarización y la violencia, surge la militarización con la conformación de nuevas alianzas del Estado con los diferentes actores para combatir el conflicto (Wood, 2010).

En el caso del desplazamiento forzado, diferentes estudios sugieren importantes implicaciones sobre la salud mental, causando depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como conductas antisociales, agresivas y violentas. Modell y Haggerty (1991) afirman que la guerra cambia el papel de la mujer, provoca estrés postraumático, dificulta el proceso de reincorporación a la sociedad civil, genera problemas psicológicos o de comportamiento. Estas afectaciones que se convierten en un obstáculo para la reinserción a la población civil, en la que se hace necesario la implementación de programación de atención y prevención (Castañeda et al., 2018). Adicionalmente, durante el desplazamiento se deterioran las condiciones de vida y se restringe su libertad de expresión (individual y colectiva), en opiniones políticas, preferencias electorales u opiniones sobre las políticas gubernamentales. Esto se debe principalmente a la amenaza y persecución que sufren, además que durante el conflicto eran obligados a votar por un candidato del régimen imperante (Rocha, 2017).

En esta línea, Luque (2016) reafirma que el desplazamiento no solo provoca pérdidas materiales, sino que a este se unen afectaciones psicológicas que perjudican la estructura familiar y el equilibrio personal. Las fracturas familiares se dan por la pérdida de familiares, violencia y maltrato familiar, pérdida de ingresos y empleo. Por lo tanto, se puede afirmar que las familias son las que reciben de manera directa los impactos del conflicto, siendo diferenciados los efectos para cada miembro de estas. Dentro de los impactos se encuentran secuestro, viudez, desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión, lo cual lleva a la desintegración de la familia y cambios en las relaciones, funciones y roles (Cifuentes, 2009).

De acuerdo con Cifuentes (2009), se evidencian cuatro grandes efectos del conflicto armado sobre las familias: pérdidas que afectan su composición y estructura (pérdida de miembros, pertenencias, abandono), actores y factores externos que afectan la dinámica relacional (imposición de normas), conflictos en las relaciones intrafamiliares (crisis emocionales, culpabilidad, agresividad, cambios de comportamientos) y transformaciones

del medio en el que se desenvuelve la familia (discriminación, inseguridad, escasez de recursos). Se crean nuevas formas de organización donde priman las familias monoparentales y familias mixtas donde los abuelos guían las nuevas generaciones dadas las afectaciones sobre los padres (padres asesinados, madres inmersas en el mercado laboral).

En el caso de las mujeres y de acuerdo con Wood (2010), se transforman los roles de género, donde las mujeres y niñas asumen roles como combatientes e interlocutoras de la autoridad, y desempeñan nuevas formas de trabajo. La mujer no solo es víctima de los abusos del conflicto, en muchas ocasiones enfrentan papeles activos como combatientes dentro de los grupos armados, como líderes sociales o constructoras de paz. En cierta manera, el conflicto permitió que la mujer participara en esferas sociales y políticas, dando paso a la creación de organizaciones y transformación de la sociedad (Barros y Rojas, 2015).

De otro lado, el conflicto también lleva a nuevos patrones de producción y trabajo. Algunas zonas rurales son altamente disputadas, abandonando el comercio y enfocándose en la agricultura y, en algunas ocasiones, en producción de cultivos ilícitos. En general, la guerra fragmenta los mercados rurales, las redes de transporte dejan de funcionar, la producción se estanca y las instituciones financieras retiran sus servicios (Wood, 2010). En esta línea, Posada (1968) afirma que la violencia en Colombia desató la expropiación de tierras, destrucción de infraestructura, persecución política, hostigamiento a los agricultores. Esto llevó a la miseria, mendicidad, vagancia, prostitución. Adicional a esto, la violencia también apareció como instrumento para favorecer la especulación con los frutos del trabajo y para generar turbios negocios de comercio. De acuerdo con Luque (2016) se desarticulan territorios, los espacios rurales se modifican, sustituyendo actividades agrícolas por extractivas, desapareciendo paisajes agrarios que fueron contruidos a lo largo de muchas generaciones. Esto compromete la soberanía alimentaria de la región, dado que desaparecen las producciones de subsistencia.

Cuando se consideran las consecuencias sobre el desarrollo mundial, los puntajes de todos los indicadores de desarrollo disminuyen. Como ejemplo de ello, se encuentran los trabajos de Gates et al. (2012, 2016), en el que se analiza el efecto del conflicto sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM] y las consecuencias en el desarrollo a nivel mundial durante el período 1970-2008. En el primer caso, utilizando modelos de regresión de efectos fijos, encontraron que los países en conflicto tienen menos puntajes para todos los indicadores ODM, además las estimaciones

del conflicto de gravedad media aumentan la proporción de la población desnutrida en aproximadamente 3.3%. Adicional a esto, el conflicto reduce la expectativa de vida en un año si este conflicto tuvo más de 2.500 muertes y disminuye el PIB per cápita en un 15%. En el segundo caso concluyen que el conflicto genera un “desarrollo en reversa” con un efecto negativo marcado con respecto a los ODM, así como con poner fin a la pobreza, hambre y mortalidad infantil.

Finalmente, al analizar el caso colombiano, se encuentra que el desarrollo humano se ve afectado a través de las afectaciones directas a las personas o hacia el contexto social, económico, político e internacional (PNUD, 2003). Los costos humanos son altos, entre el 15% y 27% de las muertes en Colombia se asocian a la guerra, además de pérdida de entre tres y seis meses de esperanza de vida. Con relación a la educación, se observa que son muchos los estudiantes que dejan de ir a la escuela porque fue destruida, sus maestros murieron o huyeron, fueron desplazados, no pueden pagarla o el presupuesto educativo fue desviado al gasto militar. La deserción escolar es mayor en municipios donde actúan paramilitares y la guerrilla, con un efecto más grande donde solo hay presencia de estos últimos. Se debe considerar que en los municipios que existe la presencia de estos grupos también pueden reportar una mayor desigualdad en estos municipios o una menor calidad de vida (PNUD, 2003).

Finalmente, Sánchez y Díaz (2005) encuentran que los efectos sociales de la actividad armada ilegal en Colombia llevan a una menor acumulación de capital humano, menor participación en el mercado laboral y menores ingresos. Además, el conflicto tiene efectos colaterales como la destrucción de la cohesión social, el aumento en los costos de transacción (costos de transporte), deterioro institucional, corrupción y congestión judicial.